

El contrato APP, la protección de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad y el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho

Elaborado por

Lourdes María Díaz Monsalvo

Especialización en Gestión Pública a Distancia

Tutoría

Edwin Joan Arango Ibagón

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

ESCUELA CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

ESPECIALIZACIONES – CEAD FUSAGASUGA

Bogotá D.C., Diciembre 2019

RAE

Resumen analítico especializado (RAE)	
Título	El contrato APP, la protección de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad y el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho
Modalidad de trabajo de grado	Monografía
Línea de Investigación	Socio jurídica
Autor	Lourdes María Díaz Monsalvo
Institución	Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Fecha.	Bogotá D.C.. Diciembre 24 de 2019
Palabras clave.	Asociaciones Público-Privadas, Derechos Humanos, Estructuración, Hacinamiento, Resocialización.
Descripción	Este documento presenta los resultado del trabajo de grado realizado en la modalidad de Monografía bajo la Asesoría del Doctor Edwin Joan Arango Ibagón, inscrito en la línea de investigación Gestión Pública y se basó en el estudio de la administración pública que incluyen presupuestos del sector privado (Asociaciones Público-Privadas -APP) ha dado a los países, la posibilidad de abarcar la prestación de más servicios de los que su propio presupuesto o riqueza nacional les permite, al involucrar al sector privado (y sus recursos económicos y conocimientos gerenciales) en la prestación de los mismos. Es debido a la situación de hacinamiento en las cárceles colombianas, una indudable situación de crisis humanitaria y, bajo el contexto de las limitaciones colombianas, tanto en recursos financieros o presupuestales como en personal capacitado y comprometido, que se inicia esta investigación sobre la situación actual, las consecuencias derivadas de la misma y una posible solución. La solución planteada, evoca proyectos penitenciarios en diferentes países, que se han realizado bajo la estructura de Asociaciones Público-Privadas, con base en ello, se estudia la viabilidad de implementarlos en el país.
Contenido	Portada RAE Tabla de contenido general Lista de tablas Resumen Abstract Introducción

	<p>Justificación</p> <p>Planteamiento del problema</p> <p>Objetivos</p> <p>Marco teórico conceptual</p> <p>Propuesta de contrato</p> <p>Conclusiones</p> <p>Referencias</p>
Metodología	Se utilizó una metodología analítica, crítica, jurídica
Conclusiones	<p>Se muestra de manera clara una crisis al interior de las cárceles, son ineficaces y no se muestra un respeto a la dignidad humana; en lo que de instalaciones se trata. Al dar una mirada a los esfuerzos estatales por resolver la problemática, se muestran una serie de problemas diferentes que desembocan en la situación de hacinamiento y violación de derechos de PPLs.</p> <p>Es por eso que se plantea una solución diferente, que no afecte directamente los recursos estatales y que brinde una solución un poco más integral; no sólo espacio para la convivencia y la protección de la salud mental de los PPL; sino también la oportunidad de educarse, convivir e incluso, trabajar.</p> <p>Cuando se habla de que la falta de programas de resocialización es algo que afecta a la sociedad en general, en el capítulo 1, en el punto 1.5.2; se hace porque, según el marco legal actual colombiano; se habla de un derecho colectivo a la paz, artículo 22 de la Constitución Política. Esto es, que la comunidad pueda gozar de un ambiente en paz, es un deber del Estado y, una de las formas de garantizarlo, es educando a la población a vivir en sociedad (resocialización).</p> <p>El planteamiento de bases mínimas del contrato APP, se hace con base el foco de: 1) construcción de centros penitenciarios; 2) brindar servicios educativos y de resocialización o apoyo psicológico y 3) garantía de los fines de un Estado social de Derecho.</p>
Referencias bibliográficas	<p>Abecé (2013). <i>Asociaciones público privadas</i>. Bogotá D.C. Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda.</p> <p>Académicas Bergalli, R. (1991). Esta es la cárcel que tenemos; pero no queremos. <i>Derecho penal Criminología</i>, 131-142.</p> <p>Acosta Muñoz, D. (1996). <i>Sistema Integral de Tratamiento Progresivo Penitenciario</i>. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Bogotá, Recuperado de: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estudios%20Penitenciarios/1.2.pdf</p> <p>Alvelar, J. (2000). <i>La sin razón de la situación carcelaria en Colombia</i>. Corporación colectiva de abogados. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Bogotá D.C: Rodríguez Quito Editores</p> <p>Niemöller, M. (1950) . <i>Primero vinieron por los socialistas</i> Washington, D.C: Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos. Recuperado de https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/martin-</p>

	<p><u>niemoeller-first-they-came-for-the-socialists</u></p> <p>Angulo González, G. (2006). Política Criminal en Colombia. En O. D. <i>Humanos, Jornadas Académicas sobre la prisión en Colombia</i>: (pp., 89-133). Bogotá. ; Memorias</p> <p>Asamblea Nacional Constituyente. (1991). <i>De los Principios Fundamentales. En Constitución Política de Colombia</i> Bogotá D.C.: Leyer</p> <p>Caicedo Trujillo, J. (2014, Octubre). <i>Reincidencia Carcelaria en Colombia: un análisis de duración</i>. (Tesis de Maestría). Recuperada de http://cea.javeriana.edu.co/documents/153049/2786252/Vol.14-No.+1+Oct+2014.pdf/8bedc4bf-fd1f-4286-b060-542492f06015</p> <p>Campo, E. (2001). <i>El drama de las cárceles en Colombia</i>. Bogotá D.C: Ediciones Librería del Profesional.</p> <p>Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá (2016). <i>Cárcel Distrital, a punto de convertirse en un ejemplo en Suramérica</i>. Recuperado de: http://www.carceldistrital.gov.co/index.php/16-noticias/129-la-carcel-distrital-a-puntode-convertirse-en-un-ejemplo-en-suramerica.</p> <p>Díaz Monsalvo, L.M. (2017). <i>Asociaciones Público Privadas, una manera de combatir el problema de hacinamiento carcelario</i> (Artículo de reflexión). Trabajo de Grado. Facultad de Derecho. Universidad Católica de Colombia.</p> <p>Echeverry, B. (1996). <i>Enfoques penitenciarios</i>. Bogotá D.C: Publicaciones de la Escuela Penitenciaria Nacional.</p> <p>Esteban, F., Alós, R., Pere, J., y Miguélez, F. (2014). La inserción laboral de ex reclusos. Una aproximación cualitativa. <i>Revista Española de Investigaciones Sociológicas</i>, 145, 181- 204.</p> <p>Garay, N. (2011). <i>Furia del Hacinamiento, paradojas del sistema penitenciario</i>. Bogotá D.C: Diario la Nación.</p> <p>Garland, D. (2006). La sociología del castigo y el Castigo en nuestros días. En D. Garland, <i>Castigo y sociedad Moderna</i> (pp. 17-39). México: Siglo Veintiuno Editores.</p> <p>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC. (2014). Informe estadístico Julio 2016. Bogotá D.C. INPEC.</p> <p>Muñoz Conde, F. (1999). La prisión como problema: Resocialización "Versus" Desocialización. En F. Muñoz Conde. <i>Derecho Penal y Control Social</i> (pp. 83-118). Bogotá: Temis.</p> <p>Pardo, A. (8 agosto, 2017). Las Asociaciones Público – Privadas (APP) en cárceles: abrir la caja de Pandora. Recuperado de https://politicacriminal.uexternado.edu.co/las-asociaciones-publico-privadas-app-en-carceles-abrir-la-caja-de-pandora/.</p> <p>Ruíz Vargas, M. A. (2008). Aspectos determinantes en la pedagogía de la resocialización. <i>Nómadas. Revista críticas de las ciencias sociales y jurídicas</i>, 1-19.</p> <p>Yijia Jing, (2010). Prison Privatization: a perspective on core governmental functions. <i>Crime Law Soc Change</i> 54:263-278.</p>
--	--

Tabla de contenido

	Pág.
Resumen.....	9
Abstract.....	10
Introducción.....	11
Justificación.....	12
Planteamiento del problema.....	12
Pregunta de investigación.....	13
Objetivos.....	13
Objetivo general.....	13
Objetivos específicos.....	13
Marco teórico conceptual.....	14
La situación carcelaria en Colombia.....	147
Definición de hacinamiento.....	15
Consecuencias del hacinamiento.....	16
Situación actual.	17
Marco legal penitenciario en Colombia.....	20
<i>La historia del marco legal penitenciario en Colombia.....</i>	20
<i>El marco legal actual colombiano.....</i>	22
<i>Políticas públicas penitenciarias y carcelarias en Colombia.....</i>	24
Asociaciones Público Privadas –APP.....	26
Definición.....	26
Contexto colombiano actual.....	26

Tipos de Contratos APP.	27
<i>B.O.T. Contract (Build-Operate-Transfer).....</i>	27
<i>Contratos BTO (Build-Transfer-Operate)</i>	28
<i>Contratos ‘Joint Venture’.....</i>	28
<i>Contratos de ‘Outsourcing’ – ‘Managment Contracts’ (O&M).....</i>	29
<i>Arrendamiento Operativo.....</i>	29
El Contrato B.O.O.T. y el B.O.T.	30
Tipos de pagos.	31
<i>Pago por disponibilidad.</i>	32
<i>Project Finance.</i>	32
<i>El modelo ‘usuario-paga’.....</i>	32
<i>Project-Bond.....</i>	32
<i>Pago de un canon por arrendamiento o licencia.....</i>	32
Experiencias ajenas en las prisiones privadas.....	33
Propuesta de Contrato.....	36
Etapas de ejecución contractual.....	36
Etapas preoperativa.....	36
Etapas de operación y mantenimiento.....	36
Etapas de reversión y terminación del contrato.....-	38
Conclusiones.....	40
Referencias	41

Lista de tablas

	Pág.
Tabla 1. Diferencias entre el contrato B.O.T y el contrato B.O.O.T.....	30
Tabla 2. Clasificación de los contratos.....	37

Lista de figuras

	Pág.
Figura 1. Hacinamiento en las regionales del INPEC.....	17
Figura 2. Inversión en infraestructura carcelaria 2004-2010 (millones de pesos).....	19

Resumen

Este siglo ha mostrado, tanto en Colombia como en el mundo, que los modelos contractuales de la administración pública que incluyen presupuestos del sector privado (Asociaciones Público-Privadas -APP) ha dado a los países, la posibilidad de abarcar la prestación de más servicios de los que su propio presupuesto o riqueza nacional les permite, al involucrar al sector privado (y sus recursos económicos y conocimientos gerenciales) en la prestación de los mismos. Es debido a la situación de hacinamiento en las cárceles colombianas, una indudable situación de crisis humanitaria y, bajo el contexto de las limitaciones colombianas, tanto en recursos financieros o presupuestales como en personal capacitado y comprometido, que se inicia esta investigación sobre la situación actual, las consecuencias derivadas de la misma y una posible solución. La solución planteada, evoca proyectos penitenciarios en diferentes países, que se han realizado bajo la estructura de Asociaciones Público-Privadas, con base en ello, se estudia la viabilidad de implementarlos en el país.

Palabras Clave: asociaciones público-privadas, derechos humanos, estructuración, hacinamiento, resocialización.

Abstract

Throughout the most recent history, both in the national context and in the global context, Public-Private Partnerships (PPP) have provided different countries with the option to cover the provision of more services than their own budget or National wealth allows them, by involving the private sector (and its economic resources and managerial knowledge) in providing them. It is due to the overcrowding situation in colombian prisons, an unquestionable situation of humanitarian crisis and, in the context of colombian limitations, both, in financial or budgetary resources and in trained and committed personnel, this research is about exposing the current situation, the consequences derived from it, and a possible solution. The proposed solution evokes penitentiary projects in different countries, which have been carried out under the structure of Public-Private Partnerships, and analyzing the option of implement them in Colombia.

Key Words: Public-Private Partnerships, Human Rights, Project Structuring, Overcrowding, Resocialization.

Introducción

El establecimiento constitucional de Colombia como un Estado Social de Derecho, trajo consigo unos fines estatales propios de un Estado con capacidad anticipatoria y con responsabilidades sobre la materialización de los derechos de tercera generación de su población.

La no concretización de los derechos de tercera generación (sociales, económicos y culturales –DESCA), se ha basado en razones financieras, que, aunque los recursos colombianos son escasos, no deben tomarse como justificación válida en lo que respecta a la garantía de los derechos de los particulares y de los grupos sociales.

En la realidad, la falta de recursos para afrontar algunas falencias estatales en cuanto a prestación de servicios públicos, no puede ser excusa para la no concretización de los derechos humanos, es por ello, que se verifican los métodos utilizados algunos países, que incluso cuentan con mayor presupuesto público, para maximizar sus capacidades y mejorar los resultados.

Bajo ese entendido, el objetivo de esta investigación es proteger los derechos de las Personas Privadas de la Libertad (en adelante PPL), analizando cómo a través de iniciativas que no castiguen el presupuesto público, se pueda mejorar las condiciones de la población carcelaria.

La presente investigación, pretende ser una posibilidad de ver, desde otra perspectiva, el problema carcelario. Lo que se busca, es extender una invitación a que el lector pueda entender la gravedad de desconocer derechos fundamentales basados en justificaciones inexactas e indiferentes ante el flagelo de la indignidad; se busca mostrar que el problema de las cárceles va más allá de hacinamiento, corrupción y delincuencia; se busca encontrar una solución viable, llamativa y de ganancia general para lograr que la población reclusa no sea olvidada o menospreciada.

Justificación

La justificación clara de la presente investigación proviene de la necesidad de afrontar la crisis humanitaria que se vive en las cárceles colombianas, pues los derechos humanos, no discriminan su aplicación dependiendo de la situación legal de cada ciudadano.

Ahora bien, hay justificaciones anexas como la necesidad de proteger la base y los fines del Estado Social de Derecho, los fines de la pena establecidos en el Código Penal vigente, el cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado colombiano, pero la base fundamental es respetar la dignidad de todos los seres humanos.

La justificación real y contundente para plantear esta investigación, se basa en las palabras de Niemöller (1950) que al español traduciría como:

Primero vinieron a buscar a los comunistas, no protesté porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, no protesté porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, no protesté porque no era judío. Después vinieron por mí, ya no quedaba nadie que pudiera protestar (p.1).

Planteamiento del problema

Colombia, como país en vía de desarrollo, tiene una debilidad presupuestal a la hora de brindar y proveer bienes y servicios públicos, con base en ello, se han dilatado las obligaciones estatales de concretización de derechos fundamentales.

Desde el entendido de que la protección y garantía de los derechos humanos son una obligación que no se relativiza frente a las capacidades presupuestales ni la voluntad del gobierno, resulta imperante la necesidad de buscar soluciones a las falencias en concretización del derecho de dignidad humana.

Teniendo presente, esa necesidad de explorar medidas diferentes se propone la verificación de las Asociaciones Público Privadas como forma de contar con recursos que no castiguen el presupuesto estatal de forma directa y provean recursos financieros y técnicos para lograr los fines del Estado Social de Derecho.

Pregunta de Investigación. Esta investigación busca dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es la mejor opción de contrato APP para la solución de los problemas de hacinamiento carcelario?, desde el punto de vista de necesidad constitucional de protección de derechos fundamentales, la viabilidad jurídica de implementación de este tipo de contratos y desde la crisis real de derechos humanos que se tiene en el territorio.

Objetivos

Objetivo general

Esta investigación, partiendo de la base de la descripción de la situación actual en cárceles, busca proponer una solución al hacinamiento carcelario, a través de las Asociaciones Público-Privadas, de cara a la protección de los fines del Estado Social de Derecho.

Objetivos específicos

- a) Descripción del marco regulatorio actual y la situación real al interior de las cárceles colombianas.
- b) Construcción de Propuesta de Contrato APP, adecuado a la normativa y objetivos del Estado Social de Derecho que rige a Colombia.

Marco teórico conceptual

La situación carcelaria en Colombia

La base de un Estado Social, es la garantía de los derechos humanos de su población, por ello, es importante verificar la realidad del territorio y no quedarse en que los mismos estén numerados en la Constitución Política, pues es sabido que la mayoría de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo tienen más de 170 artículos en sus constituciones, a excepción de Canadá, pero la realidad indica una falencia de concretización de los mismos.

La garantía, o existencia real, de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, sería la vara precisa para medir la eficiencia del trabajo de los servidores públicos y del compromiso estatal por la defensa de los derechos humanos, pues como dijo la Corte Constitucional en Sentencia T-388 de 2013: "Una sociedad no puede juzgarse por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino a sus ciudadanos marginados; entre ellos, por supuesto, las personas que están reclusas en prisión" (p. 11).

Sergio Fernández, Investigador CIPC de la Universidad Externado de Colombia, indicó con puntería que "Una mirada a las cárceles colombianas muestra que las puertas de la prisión están abiertas para que ingresen quienes encontraron cerradas las puertas del sistema educativo y el sistema productivo" (p. 37), él, en su estudio, concluye que en las cárceles colombianas, nueve de cada diez PPL pertenecen a estratos cero, uno, dos y tres y apenas la mitad de la población carcelaria tiene estudios de bachillerato.

Esta tragedia, esta crisis humanitaria y esta falta de garantía de derechos fundamentales, ya lo habían venido viviendo los PPL, incluso antes de ingresar a los establecimientos penitenciarios, pues, la política educativa colombiana reproduce la desigualdad, mientras las autoridades no han combatido con certeza el subempleo y el desempleo, por tanto, el país se

encuentra frente a “una política criminal encaminada a castigar mediante el aislamiento y el trato cruel e inhumano, a quienes han sido marginados por la sociedad”. (Defensoría del p Pueblo, 2003, p. 2)

Esto es, la verdadera solución es ampliar el abanico de oportunidades de los estratos bajos, reducir hasta eliminar las condiciones de miseria, incluir eficientes programas de inclusión social, combatir el desempleo y las diferentes formas de explotación del subempleo, brindar el acceso a educación de calidad y brindar servicios públicos básicos a toda la comunidad del territorio colombiano; pero para efectos de la presente investigación, se definirá entonces el concepto de hacinamiento.

Definición de hacinamiento. Aunque parece una definición sencilla, el problema de hacinamiento ha sido estudiado desde el ámbito ambiental, desde el ordenamiento urbano, desde los términos de vivienda digna y de hecho, se considera el hacinamiento como uno de los indicadores básicos de calidad de vida (Martínez & Ruíz-Huerta 2000; Muffels & Fouarge 2001; Tsakloglou & Papadopoulos 2002).

El término hacinamiento, según la Real Academia de la Lengua Española (2014), hace referencia a “un estado de cosas lamentable que se caracteriza por el amontonamiento o acumulación de individuos o de animales en un mismo lugar, el cual no se haya físicamente preparado para albergarlos” (p. 1). . La mayoría de los estudios sobre el hacinamiento, estudian la presencia de servicios básicos, problemas estructurales del lugar y tipo de población, como los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de definir y cuantificar las privaciones (García 2014), para EUROSTAT, entre los componentes para el cálculo de la tasa de privación material, está la disponibilidad de espacio suficiente (Commissie Europese 2011).

Ahora bien, queda claro que los problemas de hacinamiento se identifican con base en diferentes umbrales, pues para establecer un uso excesivo del espacio, el término varía, según el nivel de desarrollo de las sociedades, el momento histórico, las particularidades culturales, etc.

Para empezar a profundizar en el problema de hacinamiento carcelario, se trae a colación el libro “Situación del delito y de la seguridad de los habitantes en los países de América Latina” del investigador Elías Carranza, quien expone las falencias derivadas del hacinamiento como una grave violación de la dignidad humana, entre ellos nombra: violencia, problemas de salud, carencia de prestación de servicios de educación y visita conyugal; entre otros, lo que violenta la integridad física y mental del PPL y su dignidad humana.

Bajo este contexto de definición, se pasa a exponer las consecuencias del hacinamiento, que diferentes investigadores han plasmado en sus textos, como base de justificación para tomar acción inmediata sobre el problema carcelario que enfrenta un país que basa los fines de su constitución, en la garantía y respeto por los Derechos Humanos.

Consecuencias del hacinamiento. Las Consideraciones del Consejo Superior de Política Criminal en la exposición de motivos de la Ley 1709 de 2014, nombra un total de 121.000 PPL bajo condiciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes, con base en ello establece la necesidad de establecer mecanismos que permitan reducir en un corto plazo la población privada de la libertad en los centros de reclusión.

Además, entre los fundamentos que dan luz a la Ley que modifica la Ley 65 de 1993, sobre el régimen carcelario y penitenciario, se nombran algunas consecuencias del hacinamiento carcelario, como la desestabilización los fines del Estado, la violación del régimen constitucional, el incumplimiento de los tratados internacionales y la deslegitimación de toda la actuación estatal.

Situación actual.

La siguiente figura demuestra, con datos actuales, la situación real de hacinamiento que se sufre al interior de las cárceles del territorio colombiano y frente a la mirada indiferente de la sociedad y de las instituciones del Estado:

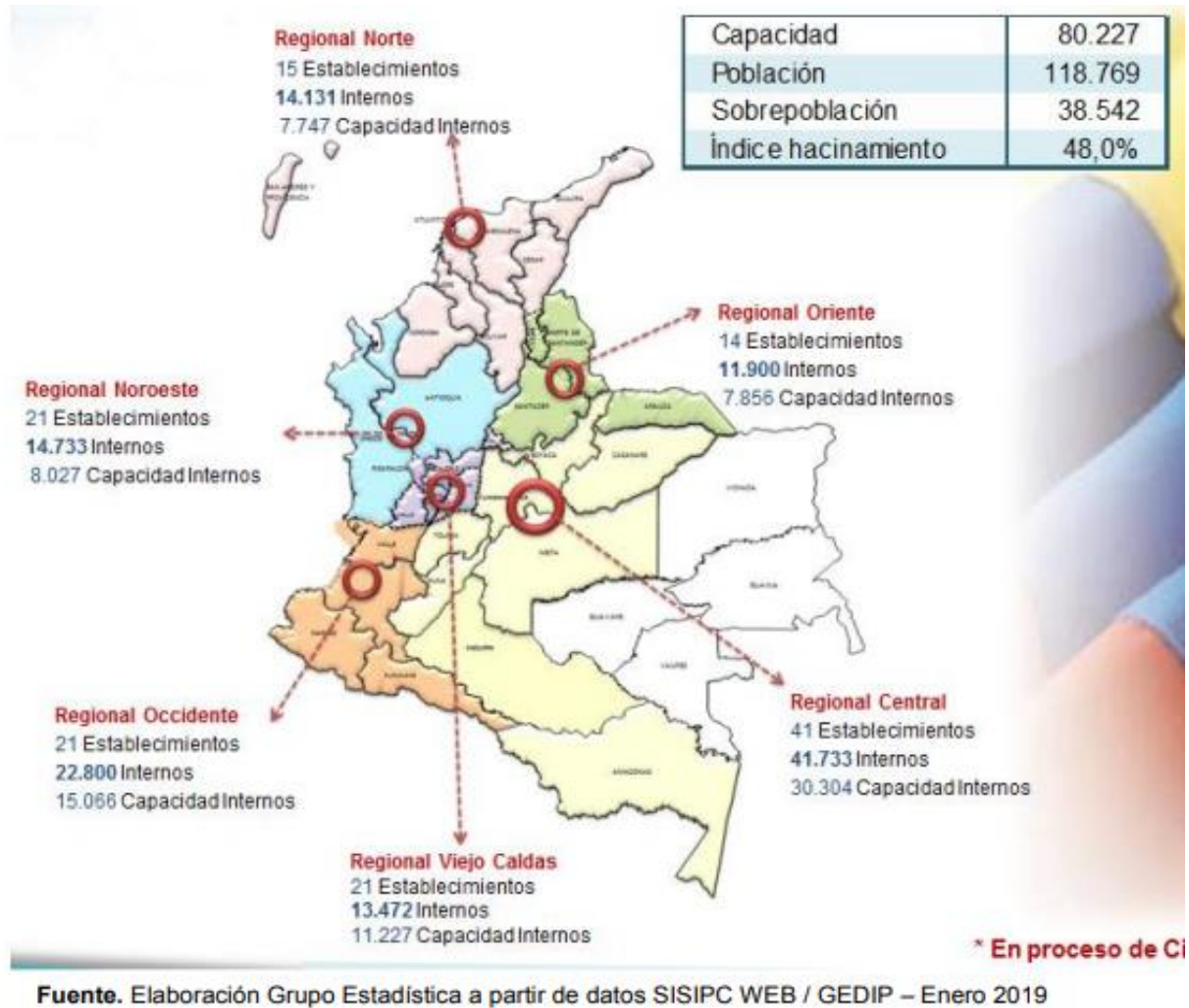


Figura 1. Hacinamiento en las regionales del INPEC

En Colombia, según informe de la Defensoría del pueblo, en trabajo conjunto con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, manifiesta que esta crisis no se ha dado únicamente por la falta de creación de nuevos establecimientos y llama la atención sobre la importancia de utilizar otros mecanismos para superar la crisis.

Para ello, brinda ejemplos como: la criminalización o creación de nuevas conductas punibles, el abuso de la privación de la libertad como medida de aseguramiento, la deficiente aplicación de las normas vigentes encaminadas a la reinserción social del condenado y a evitar la reincidencia, la implementación de una política criminal y penitenciaria preventiva antes que represiva, entre otros.

Ahora bien, entre las críticas a las soluciones planteadas, indica que los recursos de inversión no se pueden destinar a satisfacer solamente el déficit de cupos, pues eso afecta la atención de los demás elementos; indica el estudio, con claridad, que la importancia de la reinserción exitosa, radica en un tratamiento progresivo, que incluya la conformación de grupos interdisciplinarios y la ampliación de la planta de personal administrativo, de custodia y de vigilancia.

Por ello, en el contexto de la presente investigación, se propondrá un contrato que no sólo construya cárceles sino que integre un modelo de gestión de escuelas, para atender otro factor causante de este flagelo: la falta de oportunidades.

Ahora bien, para apoyar la tesis que presenta la Defensoría del Pueblo, se trae a colación el informe presentado por la Contraloría General de la Nación (2015) en el boletín Macro Fiscal “Un problema estructural sin solución a la vista “ (p. 1). el cual se realiza un estudio de los Planes Nacionales de Desarrollo y la forma en que el Estado colombiano ha venido enfrentando esta crisis, sobre el cual, se resaltan las siguientes apreciaciones:

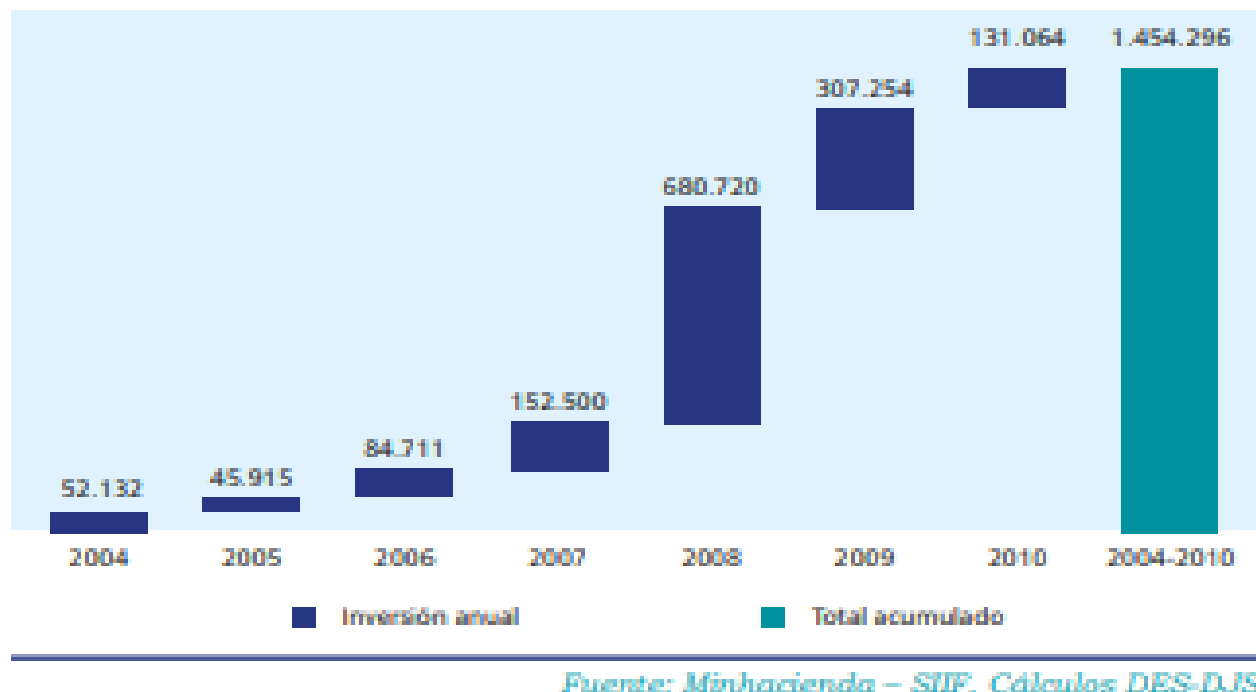


Figura 2. Inversión en infraestructura carcelaria 2004-2010 (millones de pesos)

La inversión realizada demuestra los esfuerzos por superar la crisis en cuanto a cupos al interior de los establecimientos penitenciarios, lo que demuestra que la población carcelaria ha ido incrementándose y por tanto, estos esfuerzos han sido insuficientes. Ahora bien, dentro del mismo informe se indica:

Así se reconoce en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en donde se afirma que a pesar de “la construcción de 10 nuevos establecimientos, aún no se ha resuelto el deterioro y el envejecimiento de la infraestructura existente. En efecto, con una vida útil estimada de 50 años, el 45% de los 149 establecimientos existentes supera ese término (DNP, Bases 2010-2014, p. 406)

Es importante tener presente que el Estado colombiano ha dedicado esfuerzos a la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, sin embargo, la capacidad se ve minúscula, frente a la cantidad de PPL que debe acoger; por eso, dentro de esta propuesta, se propone un modelo que incluya educación básica mínima como manera de atender esta crisis desde otros puntos.

Esto es, el problema real es el círculo vicioso que se genera por falta de presencia estatal y de garantía real de derechos, que desemboca en delincuencia común y que no puede tratarse netamente como un problema de creación de establecimientos penitenciarios.

En esta investigación, se busca construir la propuesta de un contrato de Asociación Público- Privada, que le brinde al Estado la posibilidad de cubrir la falencia de recursos de construcción del establecimiento y por otra parte, pueda cubrir servicios educativos y de salud al interior, para así, crear verdaderos centros de reinserción social y de creación de segundas oportunidades.

Marco legal penitenciario en Colombia

La historia del marco legal penitenciario en Colombia. Colombia, un Estado que, históricamente, ha mantenido la posición de promover soluciones documentales o burocráticas a las diferentes crisis y obstáculos a los que se enfrenta y ha tardado en afrontar, en conjunto y con firmeza, la situación que se vive al interior de sus cárceles.

Para empezar se considera importante contextualizar la historia del Marco Legal vigente, pues, las soluciones ineficaces han sido una constante en los asuntos penitenciarios y carcelarios del país. A lo largo de este Capítulo se describirán las leyes y políticas públicas implementadas, pues se considera importante reconocer los esfuerzos que se han realizado frente a la problemática.

Para iniciar, se nombra el primer Código Penal en Colombia, del que se tiene registro histórico: se expidió en 1837, bajo el gobierno de José Ignacio de Márquez, con aquél se producen los primeros principios rectores de la ciencia penal y se introduce la pena privativa de la libertad. Desde ese momento, la pena se fundamentó en ser un elemento de la disciplina y la resocialización del delincuente.

Según Echeverry (1996), durante las guerras civiles, el Estado olvidó el asunto carcelario hasta cuando el General Reyes firmó el Decreto Legislativo n.º 9 de 1905, con ello creó colonias penales y militares y otorgó a cada una un capellán, un médico y dos maestros de escuela.

Luego se implementa la Ley 35 de 1914, expedida bajo la presidencia del doctor José Vicente Concha y la cual creó la Dirección General de Prisiones. El presidente Enrique Olaya Herrera, expidió el decreto Ley 1405 de 1934, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la ley 20 de 1933, que fue un cuerpo de normas orgánicas mejor ordenado que los anteriores (Mayorga, 2015).

En el año de 1938 los establecimientos de reclusión en Colombia tenían una población conformada por 8.686 internos (Coronel Barragán C., 2010).

Esta población aumento anualmente en una cifra promedio de mil internos. En 1946 la población disminuyó en 2765 internos como consecuencia del proceso de desjudicialización, pero en los siguientes años continuó aumentando, debido al alto índice de violencia que se vivió durante esta época, hasta llegar a la cifra de 37.770 internos. Este aumento generó la construcción de los penales de La Picota, Popayán, y El Barne, la Cárcel Modelo de Bogotá y la distrital de Barranquilla. Igualmente se inició la construcción de las cárceles de Bucaramanga, San Gil, Pamplona, Picalaña, Manizales, Tumaco, Montería, Cartagena, Sta. Marta, Pasto, Duitama, Pereira y Cali (Mayorga, 2015 p. 17).

Más tarde, el Congreso expide la Ley 65 de 1993 "Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario", dicha ley, fue modificada por las Leyes 415 de 1997 (conocida como la Ley de Alternatividad Penal) y luego por la Ley 504 de 1999.

Para ir hilando el tema del hacinamiento carcelario como problema histórico, se indica: a mediados de 1997, las cárceles colombianas albergaban a más de 40.000 PPL en 176 establecimientos carcelarios previstos para 28.000 cupos. Si a esto se le suma que, aproximadamente, la mitad de los internos no tienen condena, sino que están en proceso sin sentencia definitiva, en la mayoría de los casos conviviendo con los ya condenados, en contra de las normas vigentes (Mayorga, 2015), la crisis es un panorama bastante cruel: no se les presume inocencia, no les queda ni un vestigio de dignidad humana por las condiciones en que son encarcelados, además, por un delito que, hasta que no haya una condena, debe presumirse que no han cometido; unos procesos penales con una duración que excede los límites de la decencia, entre otras situaciones.

El marco legal actual colombiano. En la actualidad, Colombia se rige bajo la Ley 65 de 1993 que es el actual Código Penitenciario y Carcelario, en el cual se establece el respeto a la dignidad humana en su artículo 5 “En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral” (Subrayado fuera del texto). (p.2).

El humorista Jaime Garzón, tenía una buena crítica para esas prohibiciones explícitas, decía “Es como si uno llegara a la casa de alguien y hubiera un letrero que dice ‘PROHIBIDO SONARSE CON EL MANTEL’ uno solo podría pensar ‘¿QUÉ CLASE DE GENTE VIVE ACÁ?’”,

Luego y en la misma norma, el artículo 9 prescribe las funciones y finalidad de la pena y de las medidas de seguridad así: “La pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación”(p. 4) . Esta norma es de gran relevancia, por cuanto se está mencionando la finalidad de la pena, a la cual no se le da cumplimiento Mayorga (2015); frente a esto, se reconoce que la falta de procesos de rehabilitación no sólo infringe la norma base bajo la cual se establece la limitación de la libertad que afecta al PPL sino además, es un problema que afecta a la sociedad en general que debe relacionarse con un exPPL cuando este vuelve a ingresar a la vida en sociedad.

El artículo 4 de la ley 599 del 2000, indica que la pena privativa de la libertad, tiene una función protectora y preventiva, esto es, su fin fundamental es la resocialización del condenado, la cual se logra por medio del tratamiento penitenciario, para definir el tratamiento penitenciario, se trae a colación la definición que la Defensoría del Pueblo (2003) nombró en informe titulado “Análisis sobre el actual hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia”, el cual define el tratamiento penitenciario como un:

Conjunto de actividades educativas, instructivas, laborales, recreativas, deportivas, de actividad cultural y- un aspecto muy importante- de relaciones de familia (...) tal ofrecimiento pretende mostrar al interno un nuevo proyecto de vida, otro futuro posible, para que cuando sea puesto en libertad no vuelva a delinquir (p. 6).

Ahora bien, es importante resaltar que el concepto de tratamiento penitenciario es relativamente reciente, en los códigos penitenciarios anteriores al vigente específicamente el Decreto 1405 de 1934 y el Decreto 1817 de 1964 se hacía alusión al principio de que el trabajo y

la educación serán la base para la regeneración moral y social de los reclusos, sin embargo, en estos decretos solo se hacían mención de dos programas: trabajo y educación.

En el contexto internacional, algunos ejemplos de la preocupación mostrada por proteger la salud mental del recluso y demás derechos fundamentales que tienen relación directa con la dignidad humana, son: el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y Tratamiento del Delincuente (1955), el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana de Derechos Humanos (1972) (Angulo, 2006).

Este marco normativo internacional se constituye en la hoja de ruta, de muchos Estados, en la implementación de políticas públicas en materia penitenciaria y criminal.

Políticas públicas penitenciarias y carcelarias en Colombia. En Colombia, el órgano encargado de expedir las políticas públicas que rigen la actuación administrativa en el Estado, es el Consejo Nacional de Política Económica y Social y lo realiza mediante documentos llamados CONPES.

El documento CONPES 3828 de 2015 (DNP, 2015), buscó darle un nuevo enfoque a la política penitenciaria y carcelaria, mediante su articulación con una política criminal coherente y eficaz, que, además de satisfacer las necesidades derivadas de la creciente demanda de cupos, se propuso atender otros aspectos como la adecuación sanitaria y tecnológica de los establecimientos; el mejoramiento de los programas de atención, resocialización y acompañamiento de la población privada de la libertad; y la articulación con actores estratégicos del orden territorial y del sector privado.

Colombia ha expedido los documentos CONPES: 3086/00 (DNP, 2000) para ampliación de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, 3277/04 (DNP, 2004) de Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios, 3412/06 (DNP, 2006) de

Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios – Seguimiento del CONPES 3277/09 y el documento CONPES 3575/09 8DNP, 2009) de Seguimiento y Ajuste a la Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios.

Ahora bien, es importante precisar que todos estos documentos han tenido resultados relativos, pues el problema persiste y se acrecienta de manera sistemática: la situación actual demuestra ineficacia e ineficiencia de las medidas tomadas.

En Colombia, se ha implementado modelos diferentes al interior de las cárceles para mejorar las condiciones internas, proteger la salud mental del recluso y hacer verdadera resocialización de los PPL, como el caso del Modelo de Colonia Agrícola en Acacías, Meta, modelo que fue descrito por el periódico El Tiempo como: “Colonia Agrícola de Acacías, una cárcel bajo la luz del sol Con 13 proyectos productivos al aire libre, es considerada una de las mejores cárceles de Colombia.” (Mercado, 2018, p. 1).

Lo que llama la atención, como uno de los factores de éxito de este establecimiento penitenciario de mediana seguridad, es que cuenta con un bajo porcentaje de hacinamiento, en datos de 2018, pues según la noticia, tiene extensión de 4.771 hectáreas y el 89 % de estas son reserva forestal, los 1.242 internos están divididos en siete campamentos que ocupan el 11 % del terreno. Si esto se compara con el promedio de hacinamiento que hay en otras cárceles del país, que equivale al 53%, la Colonia tiene uno de los porcentajes más bajos: del 15 %.”

Sin embargo, para la fecha de publicación de esta nota, los internos aseguraron que en algunas ocasiones, les tocaba dormir en el suelo por no contar con suficientes camas.

Se cuenta esta experiencia para mostrar cómo, al retirar del debate la afectación de hacinamiento, entran en el juego otros aspectos a tratar y tienen cabida tanto en el presupuesto

como en las agendas de los directores, todas las acciones tendientes a resocializar y enriquecer a los seres humanos que se encuentran privados de su libertad.

Asociaciones Público Privadas –APP

Definición. No hay un criterio definido para establecer qué son las APP, el Banco Mundial indica que “no hay una definición extensamente aceptada sobre qué significa una asociación público-privada (APP).” Así pues, esto refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública.

Teniendo en cuenta lo anterior, se pasa a explicar el contexto de las APP en Colombia, los diferentes tipos de contratos existentes y la aproximación a lo que se considera, el más adecuado para utilizar en este tipo de proyectos.

Contexto colombiano actual. Según un informe de Agencia Prensa Rural, de fecha Lunes 8 de abril de 2019, los trabajadores del INPEC han iniciado un paro en contra de la privatización de la guardia penitenciaria contenida en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, más concretamente en el parágrafo 2 del artículo 193, que establecía que dichos establecimientos podrían desarrollarse mediante Asociaciones Público Privadas, el Plan nacional de Desarrollo tuvo varios cambios pero su aprobación, establecida en la Ley 1955 de 2019, indicó lo siguiente:

Artículo 133. Estrategia de Cárceles del Orden Nacional. La Nación podrá adelantar gestiones para la creación, fusión, supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de cárceles para personas detenidas preventivamente; sin perjuicio de la responsabilidad que hoy le asiste a las entidades territoriales, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 65 de 1993

(----

(...) **Parágrafo 1º.** Las disposiciones establecidas en el presente artículo, podrán desarrollarse mediante el esquema de asociación público privado, concesión u otras formas de contratación establecidas en la ley. (p. 16).

De acuerdo a lo anterior, queda establecida la posibilidad de ejecutar proyectos carcelarios mediante APP en el país, pues el Plan Nacional de Desarrollo vigente, Ley 1955 de 2019, así lo establece.

Ahora bien, la pregunta jurídica daría un giro a establecer el mecanismo acorde para implementar. Cabe indicar, que cada contrato de APP es diferente y que debe adaptarse a las necesidades y herramientas de la realidad que busca tratar, sin embargo, se describirán algunos de los diferentes tipos de contratos APP que la academia ha reconocido, para brindar un diagnóstico sobre cuál se considera como preferible a aplicar en el territorio colombiano.

Tipos de contratos APP- Las APP llegaron a Latinoamérica al ser adoptadas por Chile en la Ley 9.460 de 1996 y a Colombia con la Ley 1508 de 2012, la cual, según la Gaceta del Congreso 823 de 2011, VI Colombia el momento es hoy, la justificación de la creación de esa norma muestra el modelo y el progreso chileno, los modos de implementación utilizados en Reino Unido y buscando que Colombia se posicionara como un foco de inversión extranjera.

Para entrar a definir algunos modelos de contratos APP, se copia la investigación de Díaz, 2017, para iniciar a profundizar en el modelo B.O.T. como la salida acorde a la realidad que se vive en el territorio colombiano:

B.O.T. Contract (Build-Operate-Transfer). Sus siglas traducen Construir-Operar-Transferir. En este tipo de contratos el sector privado es quien “financia, construye y opera una instalación que es de su propiedad hasta la finalización del contrato, momento en el cual transfiere el dominio de la infraestructura al Estado.” (Augenblick & Custer, 1990, p. 5). Como

característica principal, es el gobierno el único usuario de la infraestructura lo que reduce los problemas de demanda y minimiza el riesgo comercial. Ahora, presenta una potencial debilidad en que al tratarse de una instalación en concreto se limita la posibilidad del actor privado para optimizar el uso eficiente de los recursos y en que debido a la extensión y complejidad del negocio, existe un alto riesgo de renegociación (Bennet, Grohmann & Gentry; 1999, p. 7).

Contratos BTO (Build-Transfer-Operate). Estas siglas se traducen como Construir-Transferir-Operar, lo que significa que cuando el privado empieza la operación de estos proyectos ya no es el dueño de la infraestructura. El Instituto de Desarrollo de Korea del Sur, Kim (2011) ha definido los contratos BTO como un contrato principal de ejecución de proyecto a largo plazo que se celebra junto con un contrato concesional de carácter accesorio entre la autoridad competente y un privado (Proyecto De Acuerdo De Concesión Estándar Para Proyectos De Build-Transfer-Operate (BTO) prefacio del World Bank Group, Jan, 2010).

Contratos ‘Joint Venture. El tratadista colombiano Arrubla (2012) luego de analizar la jurisprudencia Estadounidense, donde él afirma se originó este contrato, ha definido este modelo como una “unión o agrupación de dos o más personas, naturales o jurídicas, sin el propósito de formar una sociedad, para realizar una operación completa en búsqueda de beneficios, asumiendo los riesgos que le son propios” (p. 296). Por otra parte, para Peña (2006) el mismo se origina durante el imperio británico y en lo que respecta a la diferencia entre estos, los consorcios y las uniones temporales indica que se trata de contratos que cumplen la misma función económica diferenciándose únicamente en lo que respecta a los aspectos tributarios y la imposición de multas. La Unión Temporal y el Consorcio en Colombia no son APP, en la medida en que pueden ser contratistas del Estado según los artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993,

es decir que una Unión Temporal o un Consorcio pueden intervenir en una APP como parte de la misma.

Contratos de ‘Outsourcing’ – ‘Managment Contracts’ (O&M). Esta práctica comercial, según Peña (2006) se da cuando se traslada “la acción de fabricar, comprar, administrar, operar ciertas funciones, asesorar y proveer entre otras, para que sea éste quien en forma independiente realice la actividad propia de aquel” (p. 416) la misma puede ser realizada de forma completa o parcial. Ahora bien, este contrato presenta las ventajas de reducir la complejidad de la operación y los riesgos y de proporcionar al gobierno un mayor rendimiento y eficacia. Pero la desventaja de que como el contratista privado no invierte su efectividad disminuye (Urueta, 2010). Es por esto que en Colombia no se ha utilizado este modelo contractual dentro del marco de las APP.

Arrendamiento Operativo. Esta modalidad contractual fue definida por Urueta (2010) como aquella en la cual “se encarga a un particular la construcción de un edificio por su cuenta y riesgo, con recursos privados, con la obligación de que dicha infraestructura posteriormente se arriende a la administración” (p. 60). Ahora bien, los elementos que caracterizan este tipo contractual de APP son: que el riesgo de mantenimiento locativo del inmueble recae sobre el arrendador, que el periodo de arrendamiento es de aproximadamente veinte años para garantizar el retorno de la inversión, que estos contratos tienen como condición resolutoria el no recibo a plena satisfacción de las obras por parte del arrendatario y que se establecen dos tipos de pagos, la remuneración fija (tarifa pactada) y la remuneración variable (depende de calidad y disponibilidad). A la fecha este contrato no ha sido utilizado en Colombia. (Díaz, 2017)

El Contrato B.O.O.T. y el B.O.T. La diferencia entre el B.O.T y el B.O.O.T. es que en el segundo caso, el privado está obligado a proveer las instalaciones. En la siguiente gráfica se expone:

Tabla 1. *Diferencias entre el contrato B.O.T y el contrato B.O.O.T*

4. Build Operate Transfer (BOT)	<ul style="list-style-type: none"> • Government finances the facility. • Private company builds the facility. • Private company operates the facility on a concession. • At the end of the O&M concession the facility is transferred to the government. 	<ul style="list-style-type: none"> • Government bears the equity risk. • Private company bears the risks associated with the construction. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limited access to private finance. 	<ul style="list-style-type: none"> • Government 	<ul style="list-style-type: none"> • Suited to projects that involve a significant investment and operating content. • Suitable for toll roads. • Does not overcome shortage of State funding for infrastructure
5. Build Operate Transfer (BOOT)	<ul style="list-style-type: none"> • Private company finances the facility. • Private company builds the facility. • Private company operates the facility on a concession. • At the end of the concession the facility is transferred to the government. • Also known as DBFO in UK: Develop- Build- Finance-Operate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Private company assumes equity and other commercial risks. • Private company assumes construction risk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Significant infusion of capital for construction and working capital for operation and maintenance. 	<ul style="list-style-type: none"> • Private company until transfer 	<ul style="list-style-type: none"> • Especially suitable if government has a large infrastructure financing gap. • Suited to projects that involve a significant investment/operating content. • Good solution for most projects.
6. Rehabil-	<ul style="list-style-type: none"> • Same as a BOOT/BOT. 	<ul style="list-style-type: none"> • As in BOOT 	<ul style="list-style-type: none"> • As in BOOT 	<ul style="list-style-type: none"> • Private 	<ul style="list-style-type: none"> • Suitable for capacity

Las características de este tipo de contratos podrían resumirse de la siguiente manera:

- a) El sector público (la Entidad o el Gobierno) otorga a una empresa privada el derecho a obtener, construir, desarrollar y operar una instalación o sistema, durante un cierto período.
- b) El operador financia, posee y construye la infraestructura solicitada y lo opera comercialmente durante el período del proyecto, después de lo cual la instalación se transfiere la propiedad al Estado.
- c) Para minimizar riesgos, a veces se establecen diferentes contratos como un contrato de construcción y un contrato de operación y mantenimiento; así se trasladan riesgos a otros participantes del proyecto.
- d) Es prácticamente una empresa privada hasta el momento de la transferencia al Estado.

Para Arriagada (2012), citado en un estudio para prisiones por Asociaciones Público-Privadas en el Perú, hay tres métodos para realizar proyectos de este tipo:

a) Privatización. Se celebra un contrato de compra-venta de prisiones públicas a privados. Posteriormente, el privado ofrece a los estados sus servicios de alojamiento de presos y de operación del establecimiento penitenciario.

b) Leasing (con operación). A través del financiamiento privado, el Gobierno en retribución paga al privado un precio fijo o un precio por la estadía diaria de cada preso recluido en el establecimiento penitenciario y al final del periodo contractual la cárcel pasa a manos del Gobierno.

c) Mixto. Es un contrato de operación de una prisión pública existente o por construirse (administración y gestión privada de la cárcel con provisión, directa o indirecta, de todos o algunos servicios penitenciarios). Entre los principales beneficios del modelo mixto destacan: la financiación privada y los pagos diferidos del Gobierno, incluso con pagos directos de los internos; la velocidad y la diligencia del concesionario privado para construir las cárceles, en comparación a su realización a través del mecanismo de obras públicas; y un ahorro en costos del 40%, aproximadamente, en comparación a si se hubiera utilizado la contratación pública.

Tipos de pagos. ‘Gerencia para el Desarrollo del Perú’, en un estudio realizado por Cárcamo, Guarnizo, Mendoza, Pajares y Vignolo, estableció que la forma para retribuir serían los pagos anuales sin embargo, se nombran otros tipos de retribución:

La Ley 1508 en su artículo 5 estableció que el derecho a la retribución de quien ejecuta proyectos de APP, se puede acordar bajo las siguientes modalidades: (i) la explotación económica del proyecto; (ii) los desembolsos de recursos públicos ó, (iii) cualquier otra retribución pactada por las partes; lo anterior permite afirmar que el margen de configuración de la retribución en los proyectos APP es muy amplia, y que dependerá del modelo financiero

empleado, del tipo de proyecto y de la disposición de recursos de las partes, emplear una o varias de las modalidades señaladas (Díaz, 2017).

Pago por disponibilidad. Cuando el proyecto es dividido por Unidades Funcionales. En el momento en que las mismas se encuentran en disponibilidad de operar (esto incluye lo referente a seguridad, accesibilidad, parámetros ambientales, etc.) se van pagando los montos acordados.

Project Finance. Cuando la amortización económica principal y el pago de intereses se realiza con los flujos de caja (cash-flows), generados por el propio proyecto.

En una mirada objetiva de “proyecto rentable” esta sería la manera de verificar la capacidad que tiene el proyecto para generar recursos.

El modelo ‘usuario-paga’. Se da mayoritariamente en los proyectos de infraestructura vial y tiene como desventaja que siempre cuenta con un respaldo estatal si se desequilibra la ecuación financiera y no se obtiene el ingreso esperado.

Project-Bond: esta operación financiera se denomina titularización, que ha sido definida por Baena (2009) como “un mecanismo jurídico y económico mediante el cual se transfiere y aísla, en un vehículo especial, activos tradicionalmente considerados como ilíquidos” (p. 701).

Pago de un canon por arrendamiento o licencia, el Estado le paga al privado, que construyó la infraestructura, un derecho para usar las instalaciones. Esta figura se da en los contratos en que no se transfiere la propiedad al gobierno propio del arrendamiento operativo (Urueta, 2010 como se citó en Díaz, 2017).

El modelo de pago acorde no debe establecer un pago “pago por preso” pues el afán del privado para reducir precios podría impactar negativamente en el bienestar del PPL, el modelo

de pago por el usuario no es una posibilidad viable en este tipo de proyectos en el territorio colombiano, al este no ser un proyecto que genere rentabilidad el modelo de pago

ProjectFinance no es una opción y el pago por disponibilidad es, básicamente, el establecido en el Perú según la investigación citada.

Teniendo como base que el contrato que se adecúa a las necesidades estatales es el B.O.O.T y el pago por disponibilidad es el utilizado por países como Nueva Zelanda, Bélgica, Francia y Australia (Díaz, 2017) quienes han utilizado los contratos de Asociaciones Público – Privadas en prisiones; se llega a la conclusión de que la posibilidad de utilizar contratos APP en la construcción de prisiones es válido según la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo; que verificando el contexto global el modelo más utilizado es el de *construir y transferir* y se utiliza el pago por disponibilidad.

Experiencias ajenas en las prisiones privadas. Pardo (2017) en su artículo ‘Las Asociaciones Público – Privadas (APP) en cárceles: abrir la caja de Pandora’, crítica la decisión de Estados Unidos de “privatizar” el manejo carcelario, argumentando:

La forma en que tradicionalmente funciona la operación de establecimientos carcelarios por privados es mediante la asignación de un precio por cada día que una persona permanece privada de la libertad. Esto multiplicado por el número de reclusos de determinado establecimiento es el dinero que recibe el particular durante un cierto número de años que le permita amortizar su inversión y tener unas nada despreciables ganancias.

Además de lo controversial que puede resultar delegar en privados funciones fundamentales de la competencia del Estado como lo es la administración del castigo, este modelo genera una serie de incentivos perversos que distan mucho de beneficiar a las

personas privadas de la libertad y a la sociedad en general. En primer lugar, los inversionistas privados entran a formar parte de los interesados en que haya más personas privadas de la libertad y en que las leyes penales sean más severas; en segundo lugar, hay pocos incentivos para generar programas de resocialización, toda vez que la reincidencia conviene a quienes se lucran de la privación de la libertad; y por último, un recorte en el gasto en todo tipo de servicios carcelarios implica mayores utilidades, lo cual va directamente en contravía de los derechos de los detenidos. Por si lo anterior no fuera poco, esta solución se equivoca en suponer que el problema de derechos humanos en las cárceles es tan solo un tema de espacio y no de coherencia de la política criminal. (pp. 1-2).

Ante esto, se cita la carta que escribió la Fiscal General Adjunta de EEUU en donde reconoce que el privado no ha tenido el desempeño que han tenido las estatales, así:

(...) las prisiones privadas desempeñaron un papel importante durante un periodo de dificultad, pero el tiempo ha demostrado que su desempeño es pobre comparado con las del Departamento. Estas prisiones simplemente no poseen el mismo nivel de servicio penitenciario, ni los programas ni los recursos; no logran ahorros sustanciales en costos; y como se advierte en el reciente reporte de la oficina del inspector general del Departamento, estas tampoco mantienen el mismo nivel de seguridad y protección. Los servicios de rehabilitación que ofrece el Departamento, tales como programas de educación y formación profesional han resultado ser difíciles de reproducir y exteriorizar, y estos servicios son esenciales para reducir la reincidencia y mejorar la seguridad pública.

Por todas estas razones, me encuentro deseosa de contar con su colaboración en el comienzo del proceso de reducción, y en última instancia terminación, del uso de prisiones de gestión privada. Como sabrá, todos los contratos existentes del Departamento con compañías penitenciarias privadas se pactaron a término fijo y están sujetos a renovación o terminación. Estoy ordenando que tan pronto como cada contrato alcance su término, el Departamento debe o declinar la renovación del contrato o reducir sustancialmente el alcance del mismo de manera consistente con la ley y la disminución poblacional de internos del Departamento. (...)

Si bien la presente investigación buscó verificar mejores opciones que las planteadas en Díaz (2017); en el contexto global y la experiencia vivida por diferentes países, demuestran poca gestión interna por parte del privado en lo que respecta a los objetivos y fines de la pena privativa de la libertad, es por esto, que se propone un contrato de neta construcción y un contrato de manejo de escuela por APP, que cuente con sus propios índices de gestión, para asegurar un poco, la posibilidad de empleo al salir de la cárcel y combatir la reincidencia.

Propuesta de Contrato

Se nombran los parámetros básicos de la construcción de un contrato B.O.O.T y B.O.T. para la construcción y operación parcial del establecimiento penitenciario, con base en el contrato APP modelo, para construcción, que la Agencia Nacional de Infraestructura tiene publicado en su página oficial.

Se aclara que, para efectos del presente, solo se tienen en cuenta los puntos base que se proponen como solución del problema de falta de recursos y la opción de manejar contratos APP para el tema, en el cual, de manera general, se proponen puntos base de contrato de diseño y construcción y se incluyen algunos puntos de referencia de contratos APP para operación de escuelas.

Etapas de ejecución contractual

La ejecución del Contrato tiene diferentes Etapas, las cuales se entran a describir así:

Etapas preoperativa. Esta etapa estará a su vez compuesta por la Fase de Preconstrucción y la Fase de Construcción.

La Fase de Preconstrucción correrá desde la Fecha de Inicio hasta la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Fase de Construcción, a partir la cual empezará a correr la Fase de Construcción, la cual terminará cuando se suscriba la última de las Actas de Terminación de Unidad Funcional, fecha en la cual terminará la Etapa Preoperativa.

Etapas de operación y mantenimiento. La Etapa de Operación y Mantenimiento iniciará con la suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional y se extenderá hasta la Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento

Los autores del informe de la IE (en 2009 con Walter Dresscher como presidente) sobre “Privatización Encubierta” indican que, para muchos, las PPP son una forma de privatización

exógena (Ball y Youdell, 2008: 8). Los autores sostienen que las relaciones de poder en las asociaciones público-privadas varían notablemente y que el lenguaje de las asociaciones “camufla” en muchas ocasiones acuerdos contractuales o de subcontratación (2008: 33).

En ese mismo informe, clasifican los contratos, así:

Tabla 2. *Clasificación de los contratos*

Objetivo de la contratación del gobierno	Definición	Tipos de contrato
Gestión servicios profesionales (aportación)	El gobierno adquiere servicios de dirección escolar o servicios auxiliares y profesionales	Contratos de administración Contrato de servicios profesionales (diseño del plan de estudios)
Servicios operativos (proceso)	El gobierno adquiere servicios operativos para las escuelas	Contratos operativos
Servicios educativos (resultados)	El gobierno adquiere plazas para estudiantes en escuelas privadas (contratos con la escuela para matricular a estudiantes específicos)	Contratos para la educación de estudiantes específicos.
Disponibilidad de instalaciones (aportación)	El gobierno adquiere la disponibilidad de instalaciones	Provisión de contratos para el servicio de infraestructura
Disponibilidad de instalaciones y servicios educativos (combinación de aportación y resultados)	El gobierno adquiere la disponibilidad de instalaciones junto con servicios (operativos o resultados)	Provisión de contratos de infraestructura con contratos de servicios educativos

Fuente. Patrinos Banco Mundial 2006

Como para efectos de la presente investigación, se trata de plasmar algunas buenas prácticas en materia de contratos de operación APP en escuelas para solventar la falencia estatal de educación a los estratos bajos, quienes en su mayoría son las PPL del país; y lograr así los fines de la pena sobre reinserción, se toma el modelo de “Disponibilidad de instalaciones y servicios educativos”.

La disponibilidad de instalaciones se ha desarrollado a través de la construcción, la cual, en este contexto puede no tener un peso significativo; pues así se construya o se cuente con la infraestructura, el objeto de este contrato es tener la instalación para poder ubicar a los PPL.

En cuanto a los servicios educativos, se resalta lo siguiente:

Subcontratación de servicios educativos: Contratos del gobierno con el sector privado para la provisión de servicios relacionados con la educación, tales como: el diseño del plan de estudios y/o su puesta en práctica; evaluación o gestión de los exámenes; evaluación, revisión, inspección de la escuela y/o programas de mejora escolar, así como el suministro de libros de texto y otros materiales de aprendizaje.

La idea es contar con personal calificado, externo y comprometido, que ayude a preparar a los PPL en la búsqueda de una vida legal, fructífera y social.

Esta etapa iniciará una vez concluya la Etapa de Operación y Mantenimiento o cuando se haya declarado la Terminación Anticipada del Contrato, y concluirá con la suscripción del Acta de Reversión.

Para los asuntos de Operación y mantenimiento se toma referencia de un contrato de operación de escuelas en el que básicamente la operación se basa en el suministro de libros, personal preparado para brindar las capacitaciones, trámites legales para la aplicación de los Exámenes de Estado al interior del Establecimiento y unos índices de calidad pre-establecidos.

Al concluir la Etapa de Operación y Mantenimiento, se inicia la Etapa de Reversión

Etapas de reversión y terminación del contrato. Ocurrencia. El presente Contrato terminará cuando finalice la Etapa de Reversión, lo cual ocurrirá a más tardar al vencimiento del plazo máximo de la Etapa de Reversión, existirán Causales de terminación anticipada del contrato las cuales se establecerán en cada uno de los contratos a iniciar.

- a) **Idioma del Contrato.** Para todos los efectos el idioma oficial del Contrato es el castellano.
- b) **Impuestos.** Cada Parte asumirá los impuestos cuya obligación tributaria se encuentre a su cargo conforme a la Ley Aplicable.
- c) **Modificación del Contrato.** El Contrato junto con sus Apéndices no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la Ley Aplicable.
- d) **Subsistencia de obligaciones.** La terminación del Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tal evento, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y responsabilidad.
- e) **No renuncia a derecho-:** Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario.
- f) **Información financiera.** El Apéndice Financiero contiene la información que el Concesionario ha entregado, dicha información será considerada como una mera referencia, que podrá ser o no tenida en cuenta para efectos de i) cualquier negociación que se adelante entre las Partes durante la ejecución del presente Contrato que implique la revisión de la Retribución del Concesionario o la ejecución de Intervenciones adicionales, ii) definir el valor de cualquiera de las variables de las fórmulas de liquidación del Contrato, aplicables para los casos de Terminación Anticipada.

Conclusiones

Se muestra de manera clara una crisis al interior de las cárceles, son ineficaces y no se muestra un respeto a la dignidad humana; en lo que de instalaciones se trata. Al dar una mirada a los esfuerzos estatales por resolver la problemática, se muestran una serie de problemas diferentes que desembocan en la situación de hacinamiento y violación de derechos de PPLs.

Es por eso que se plantea una solución diferente, que no afecte directamente los recursos estatales y que brinde una solución un poco más integral; no sólo espacio para la convivencia y la protección de la salud mental de los PPL; sino también la oportunidad de educarse, convivir e incluso, trabajar.

Cuando se habla de que la falta de programas de resocialización es algo que afecta a la sociedad en general, en el capítulo 1, en el punto 1.5.2; se hace porque, según el marco legal actual colombiano; se habla de un derecho colectivo a la paz, artículo 22 de la Constitución Política. Esto es, que la comunidad pueda gozar de un ambiente en paz, es un deber del Estado y, una de las formas de garantizarlo, es educando a la población a vivir en sociedad (resocialización).

El planteamiento de bases mínimas del contrato APP, se hace con base el foco de: 1) construcción de centros penitenciarios; 2) brindar servicios educativos y de resocialización o apoyo psicológico y 3) garantía de los fines de un Estado social de Derecho.

Referencias

- Abecé (2013). *Asociaciones público privadas*. Bogotá D.C. Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda.
- Académicas Bergalli, R. (1991). Esta es la cárcel que tenemos; pero no queremos. *Derecho penal Criminología*, 131-142.
- Acosta Muñoz, D. (1996). *Sistema Integral de Tratamiento Progresivo Penitenciario*. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Bogotá, Recuperado de:
<http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estudios%20Penitenciarios/1.2.pdf>
- Alvelar, J. (2000). *La sin razón de la situación carcelaria en Colombia*. Corporación colectiva de abogados. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Bogotá D.C: Rodríguez Quito Editores.
- Angulo González, G. (2006). Política Criminal en Colombia. En O. D. *Humanos, Jornadas Académicas sobre la prisión en Colombia*: (pp., 89-133). Bogotá. ; Memorias
- Arévalo. D. (19 de Mayo de 2016). *Notas de Campo de Entrevista*. Responsable del área de Atención Integral de la Cárcel Distrital de Bogotá. Bogotá.
- Asamblea Nacional Constituyente. (1991). *De los Principios Fundamentales*. En *Constitución Política de Colombia* Bogotá D.C.: Leyer
- Banking on Bondage. (Nov de 2011). *Private prisons and mass incarceration* American Civil Liberties Union (ACLU).
- Baratta, A. (2004). Cárcel y marginalidad social. En A. Baratta, *Criminología crítica y crítica del derecho penal* (pp. 193-209). México: Siglo Veintiuno Editores.

Cáceres, G. (2007). El Salvador, país centroamericano con mayor hacinamiento penal. San Salvador: Santillana.

Caicedo Trujillo, J. (2014, Octubre). *Reincidencia Carcelaria en Colombia: un análisis de duración*. (Tesis de Maestría). Recuperada de <http://cea.javeriana.edu.co/documents/153049/2786252/Vol.14-No.+1+Oct+2014.pdf/8bedc4bf-fd1f-4286-b060-542492f06015>

Campo, E. (2001). *El drama de las cárceles en Colombia*. Bogotá D.C: Ediciones Librería del Profesional.

Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá (2016). *Cárcel Distrital, a punto de convertirse en un ejemplo en Suramérica*. Recuperado de: <http://www.carceldistrital.gov.co/index.php/16-noticias/129-la-carcel-distrital-a-puntode-convertirse-en-un-ejemplo-en-suramerica>

Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá Distrital. (2016). *La Distrital una cárcel donde se cumplen condenas y sueños*. Recuperado de: <http://www.carceldistrital.gov.co/index.php/16-noticias/128-la-distrital-una-carcel-dondese-cumplen-condenas-y-suenos>

Castañeda, J. (1997). Sistema de Estratificación Social. *Revista Futuro*, 21, 2, 22.

Castillo Ardila, A. M. (s.f.). Castigo y resocialización en el Sistema PASO: un acercamiento a la política pública carcelaria en Colombia. Recuperado de https://www.academia.edu/7951576/Castigo_y_resocialización_en_el_Sistema_PASO_un_acercamiento_a_la_pol%C3%ADtica_p%C3%BAblica_carcelaria_en_Colombia

Castro, S. (2002). Aportes a la comprensión de la identidad étnica en niños, niñas y adolescentes de grupos étnicos minoritarios. *Ciencias Sociales*. México: Temacilli.

- Cavadino, M. & Dignan., J. (2006). Prison privatization: Panacea or Pandora's box en *Prison readings*. Editado por Yvonne Jewkes y Helen Johnston.
- Cervello, V. (2006). *Derecho penitenciario*. (2º ed.). Valencia, España: Tirant lo Blanch.
- Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. (1999). *Informe sobre la situación de los derechos humanos en México. 1999, de Organización de los Estados Americanos*
- Recuperado de web: www.cidh.oas.org/countryrep/colom99sp/capitulo-14.htm 9.
- Congreso de la República. (19 de Agosto de 1993). *Código penitenciario y Carcelario*. [Ley 65 de 1993]. DO: 40999.
- Congreso de la República. (24 de Julio de 2000). Ley 599/00 *Código Penal Colombiano*. Bogotá D.C. DO: 44.097
- Congreso de Colombia (2004) Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal. Bogotá: Diario Oficial 45.658.
- Congreso de la República. (20 de Enero de 2014). [Ley 1709 de 2014]. Bogotá D.C. DO: 49039. CONPES.
- Contraloría de Bogotá D.C (2009). *Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral – modalidad regular*, Bogotá: Contraloría de Bogotá D.C.. Dirección Sector Gobierno
- Recuperado de:
- http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/AuditoriaGubernamental/Gobierno/PAD_2009/CicloII/SECRETARIA%20DE%20GOBIERNO.doc
- Contraloría de Bogotá. (2013). *Informe Visita Fiscal Cárcel Distrital, Ocupación y Funcionamiento* . Contraloría de Bogotá D.C ,-. Dirección Sector Gobierno, Bogotá.
- Recuperado de:

http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/AuditoriaGubernamental/Gobierno/PAD_2013/Visita%20Fiscal/VF_SDG_CARCEL_DISTRITAL.pdf

Contraloría Delegada Para El Sector Defensa, 2008. Documento justicia y seguridad, Bogotá, Contrato Modelo ANI

Coronel Barragán C. (2010). *Población Carcelaria. 2010*. Bogotá D.C.: INPEC. Recuperado de web: www.inpec.gov.co

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-153/1998; Magistrado Ponente; Eduardo Cifuentes Muñoz.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-256/2000; Magistrado Ponente; José Gregorio Hernández Galindo.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1275/2005; Magistrado Ponente; Humberto Antonio Sierra Porto.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-126/2009; Magistrado Ponente; Humberto Antonio Sierra Porto.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-622/2010; Magistrado Ponente; Nilson Pinilla Pinilla.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-213/2011; Magistrado Ponente; Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

De Escamilla, A. (1985). *El juez de vigilancia penitenciaria*. Madrid: Civitas.

Defensoría del Pueblo. (2003). Análisis sobre el actual hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia. Recuperado en: <http://www.defensoria.gov.co/es/public/Informesdefensoriales/810/An%C3%A1lisis2003-sobre-el-hacinamiento-carcelario-y-penitenciario-en-Colombia->

Informesdefensoriales---C%C3%A1rceles-Informes-defensoriales---Derechos-
Humanos.htm

Dellaportas, S. (13 de Abril de 2014). *The effect of a custodial Sentence and professional disqualification on reintegration*. El Sevier (25), 671-682.

Departamento Nacional de Planeación. (2015). *Documento CONPES 3828/15*. Recuperado de <http://fecospec.org/juridica/legislacion/18-legislacion/250-documento-conpes-3828-de-2015->.

Díaz Monsalvo, L.M. (2017). *Asociaciones Público Privadas, una manera de combatir el problema de hacinamiento carcelario* (Artículo de reflexión). Trabajo de Grado. Facultad de Derecho. Universidad Católica de Colombia.

Echeverry, B. (1996). *Enfoques penitenciarios*. Bogotá D.C: Publicaciones de la Escuela Penitenciaria Nacional.

Esteban, F., Alós, R., Pere, J., y Miguélez, F. (2014). La inserción laboral de ex reclusos. Una aproximación cualitativa. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 145, 181-204.

Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

Garay, N. (2011). *Furia del Hacinamiento, paradojas del sistema penitenciario*. Bogotá D.C: Diario la Nación.

Garland, D. (2006). La sociología del castigo y el Castigo en nuestros días. En D. Garland, *Castigo y sociedad Moderna* (pp. 17-39). México: Siglo Veintiuno Editores.

González A. (2004). *Ponencia para el Proyecto de ley 03 de 2003*.

INPEC. (2015). *Reseña Histórica. 2015, de INPEC* Sitio web: <http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ResenaHistorica>

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC. (2014). Informe estadístico Julio 2016.

Bogotá D.C. INPEC.

Labastide, R. (2011). *Grave en hacinamiento carcelario*. Panamá: Susaeta

Manzanares, J.L. (1989). *El Juez de Vigilancia en Lecciones de Derecho Penitenciario*.

Salamanca: Universidad Alcalá de Henares, 2da edición.

Mercado, L. (21 enero, 2018). Colonia Agrícola de Acacias, una cárcel bajo la luz del sol.,

Diario El Tiempo. Ganadería, prisión. Recuperado de

<https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/colonia-agricola-de-acacias-la-mejor-carcel-de-colombia-67144>

Ministerio de Justicia y del Derecho. (2014). *Lineamientos para el fortalecimiento de la política Penitenciaria en Colombia*. Bogotá D.C. Minjusticia y del Derecho, Dirección de política Criminal y Penitenciaria.

Modulo “From mass incarceration to for profit prisons: Criminalization as market driver” del curso virtual (MOOC) “Justice, Mercy and Mass Incarceration” de la Universidad de Vanderbilt.

Muñoz Conde, F. (1999). La prisión como problema: Resocialización "Versus" Desocialización . En F. Muñoz Conde. *Derecho Penal y Control Social* (pp. 83-118). Bogotá: Temis .

Naciones Unidas. (2013). *Guía de introducción a la prevención de la reincidencia y la reintegración social de los delincuentes*. New York: Organización de Naciones Unidas, Oficina de las contra la Droga y el Delito,

Niemöller, M. (1950) . *Primero vinieron por los socialistas.....* Washington, D.C: Museo

Memorial del Holocausto de los Estados Unidos.Recuperado de

<https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/martin-niemoeller-first-they-came-for-the-socialists>

- Nguyen, T., Arbach- Lucioni, K. , (2011). Factores de Riesgo de la Reincidencia Delictiva en Población Penitenciaria. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3(6), 273.294.
- Nuevo Foro Penal (79), 153-172. Publicaciones periódicas No Académicas Anitua, G. (7 de Julio de 2010). Justificación del castigo e inflación penal. Recuperado de http://www.palermo.edu/Archivos_content/derecho/pdf/Justificacion-del-Castigo-eInflacion-Penal-Prof-Anitua.pdf
- NULIVALE. (14 de Junio de 1995). *Reducción de Penas por Trabajo, Estudio, o educación*. El Tiempo. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-344911>.
- Ossa López, M. F. (2016). *La cárcel en Colombia. Un espacio para la venganza y la reincidencia*. Medellín: UNAULA.
- Papacchini, A. (1997). *Filosofía y derechos humanos*. Santiago de Cali: Universidad del Valle
- Pardo, A. (8 agosto, 2017). Las Asociaciones Público – Privadas (APP) en cárceles: abrir la caja de Pandora. Recuperado de <https://politicacriminal.uexternado.edu.co/las-asociaciones-publico-privadas-app-en-carceles-abrir-la-caja-de-pandora/>.
- Traducción hecha por Carlos Gutiérrez. *Estudiante de quinto año de Derecho, Monitor del Centro de Investigación en Política Criminal, Universidad Externado de Colombia*.
- Portafolio (256 marzo, 2017). *Listos proyectos de APP sociales por 11 billones*. Recuperado de <http://www.portafolio.co/economia/gobierno/listos-proyectos-de-app-sociales-por-11-billones-504452>
- Rangel Torrijo, H. (Diciembre de 2012). Estado del Arte: Reinserción Laboral de personas condenadas en América Latina. Recuperado de <http://www.slideshare.net/EUROsocial-II/la-reinsercion-laboral-personas-condenadasal-ea>

Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la lengua española: hacinamiento*. Madrid.

ASALE. Recuperado de [http. www.rae/](http://www.rae/)

Ruíz Vargas, M. A. (2008). Aspectos determinantes en la pedagogía de la resocialización.

Nómadas. *Revista críticas de las ciencias sociales y jurídicas*, 1-19.

Ruíz, J. I. (Diciembre de 2010). Actitudes Sociales hacia ex reclusos: Un estudio exploratorio.

Suma Psicológica, 17(2), 169-177.

Sáenz, M. (2007). El discurso re-socializador hacia una nueva propuesta para el sistema penitenciario. México: *Revista de Ciencias Sociales*.

Sandoval Huertas, E. (1982). Antecedentes históricos, objetivos declarados de la sanción penal.

En E. Sandoval Huertas. *Penoalogía, Parte General* (pp, 98-133). Bogotá: Universidad del Externado.

Suarez O. (2005). *Ponencia para segundo debate al proyecto de ley 220 de 2005*. Bogotá D.C.

Congreso de la República, Gaceta oficial 80, 20.

Tracy F.H Chang and Douglas E. Thompkins. (2002). Corporations go to prisons: The expansion of corporate power in the correctional industry. *Labor Studies Journal*, 27, 1 (2002).

Uribe Barrera, J. P. (Julio- Diciembre de 2016). Rebaja de Pena por vía de Rendición: ¿Derecho o Beneficio? Comentario a la sentencia 35.767 de la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia, del seis (06) de Junio de dos mil doce 2012.

Uribe, A. (2004). *Decreto 2636 de 2004*. Bogotá D.C: Diario Oficial 45.645

Yijia Jing, (2010). Prison Privatization: a perspective on core governmental functions. *Crime Law Soc Change* 54:263-278